

*Dignidad en movimiento. El ascenso de la
movilización social en Colombia (2010-2014)*

Edwin Cruz

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ABSTRACT

During the first administration of President Juan Manuel Santos (August 2010-August 2014) social movements ascended considerably. This paper reconstructs and analyzes the dynamics of mobilization. First, the main events are described, then political opportunity structures, mobilizing structures and collective action frames, that support the protest, are studied. The change in the political context, in relation to the government of Álvaro Uribe (2002-2010), created various opportunities and expectations for the protest, which articulated a process of rebuilding mobilizing structures and construction of collective action frames able to articulate various actors.

Keywords: Colombia, social mobilization, Santos government, peace negotiations.

Durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos (agosto de 2010- agosto de 2014) las movilizaciones sociales ascendieron considerablemente. Este trabajo reconstruye y analiza las dinámicas de movilización. En primer lugar, se describen los principales eventos contenciosos. Luego se estudian las estructuras de oportunidad política, las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva que soportan la protesta. El cambio en el contexto político en relación con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), generó diversas oportunidades y expectativas para la protesta, que se articularon a un proceso de recomposición de sus estructuras de movilización y la construcción de marcos de acción colectiva capaces de articular diversos actores.

Palabras claves: Colombia, movilización social, gobierno Santos, negociaciones de paz.

Introducción

Durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos (agosto de 2010- agosto de 2014) las movilizaciones sociales ascendieron considerablemente. De acuerdo con la Policía Nacional, mientras en el año 2010 se presentaron 1142 movilizaciones, en octubre de 2011 ya podían contabilizarse 1573 (El Tiempo, 2011a). Utilizando una metodología distinta y la base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Delgado, García y Restrepo (2011, p. 48), calcularon que tan solo en el primer año de gobierno se registraron en promedio 2,5 protestas al día. En su más reciente informe, el CINEP (2014) sostiene que en 2013 se presentaron 1027 protestas, lo que equivale a la cifra más alta desde que empezaron sus registros en 1975. En sí mismas, éstas cifras constituyen un indicador de la relevancia que ha tenido la protesta social en el país en los últimos años, sobre todo si se tiene en cuenta que a principios del siglo XXI el diagnóstico predominante resaltaba la dificultad que presentaban los movimientos sociales para generar protestas, en comparación con otros países latinoamericanos, entre otras cosas debido a las constricciones que implica el conflicto armado interno (Archila, 2002). En contraste, desde hace unos años se ha producido una recomposición de los movimientos sociales (Bautista, 2012).

En este artículo se realiza un análisis de la protesta social en el primer gobierno de Santos, buscando explicar por qué se ha producido el mencionado ascenso en los niveles de protesta. Para tal efecto, se adoptan las categorías de análisis de la “agenda clásica” para el estudio de los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005, p. 45; McAdam, McCarthy, Zald, 1999; Tarrow, 1997). Desde esta perspectiva, en primer lugar se analiza la “contienda política” en la que se enmarca el reciente ciclo de protestas para, en un segundo momento, formular hipótesis explicativas a partir del examen de la estructura de oportunidad política, las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva articulados en las movilizaciones.

Políticas principales del gobierno Santos, como el impulso a los tratados de libre comercio y la extracción de recursos minerales enmarcada en la denominada “locomotora minero energética”, han generado un creciente descontento debido a las consecuencias negativas sobre el sector agrario, la salud y la educación. No obstante, las movilizaciones no se explican como una reacción frente a la situación económica de estos sectores, sino por variables políticas, principalmente por el cambio en el contexto político en relación con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que generó diversas oportunidades y expectativas para la protesta, y por la capacidad de agencia de las personas, expresada en la recomposición de sus estructuras de movilización y la construcción de marcos de acción colectiva capaces de articular diversos actores a sus reivindicaciones.

La política contenciosa

Las numerosas protestas de los últimos años han estado motivadas por el rechazo a la orientación neoliberal del gobierno, que se expresa en la mercantilización de la salud y la educación, en su empeño en ahondar el modelo de acumulación basado en la extracción de materias primas, principalmente minerales, y la promoción a la inversión por parte de multinacionales. Existe un proceso de organización ascendente de sectores tradicionalmente no organizados y la puesta en práctica de repertorios de acción colectiva novedosos en el contexto colombiano, como las actividades de protesta cultural, los “abrazatones”, las “besatones” o los cacerolazos, si bien tiende a predominar el bloqueo de las vías de comunicación principales. Ésta dinámica puede comprenderse a partir del concepto de “contienda política”, que designa

la interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: (a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores y (b) las reivindicaciones, en caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores” (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 5).

Así, aunque las cifras de protesta indican que ésta ha sido regular, desde esta perspectiva la contienda política ha girado en torno a las manifestaciones contenciosas que se presentan a continuación.

Narrando la protesta

El febrero de 2011, la iniciativa gubernamental de liberar al juego del mercado los precios del transporte de carga motivó un paro liderado por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Asociación Colombiana de Transportadores de Carga (ATC). Los bloqueos de carreteras motivaron violentos enfrentamientos con la fuerza público y grandes pérdidas económicas. Inicialmente el gobierno se negó a ceder ante las “vías de hecho”, pero más tarde el vicepresidente, Angelino Garzón, acordó con los camioneros retirar la reforma y concertar un mecanismo de regulación de precios (Portafolio, 2013).

En septiembre los habitantes de Puerto Gaitán (Departamento del Meta) realizaron un bloqueo de carreteras en protesta contra la multinacional petrolera Pacific Rubiales, demandando el mejoramiento de las condiciones de trabajo (Salcedo, 2013). Ya en julio se había presentado un paro en la planta petrolera, bajo la demanda de terminar con las “camas calientes” o camas rotativas (los trabajadores deben esperar a que uno de sus compañeros se levante para poder descansar), contra el maltrato de los capataces, la sobre explotación, la inestabilidad laboral y la escasez de agua potable. Para ese momento los trabajadores no se encontraban sindicalizados, pero la Unión Sindical Obrera

(USO), que agrupa los trabajadores petroleros, representó a los contratistas de Pacific Rubiales y consiguió un acuerdo que incluyó mesas de concertación.

No obstante, la Empresa Colombiana de Petroleos (Ecopetrol) y Pacific Rubiales abandonaron las negociaciones, de forma que en septiembre retornaron las protestas, con bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. El 21 de septiembre la USO consiguió un acuerdo con Pacific Rubiales, con el aval de los ministros de Protección Social y de Interior, que incluía mejoramiento de las condiciones materiales y jurídicas de trabajo, vinculación de mano de obra de Puerto Gaitán y estabilidad de los contratos, entre otros. No obstante, Pacific Rubiales desconoció los acuerdos a los pocos días. El Vicepresidente Garzón sirvió de intermediario nuevamente, pero las negociaciones se tradujeron en el desconocimiento de la representatividad de la USO y la organización de otro sindicato, en octubre, denominado Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios (UTEN), con 700 trabajadores de un total de 12.000. Para completar, se creó el Batallón Militar No 15, que se ubicó dentro de los campos petroleros y es financiado por Pacific Rubiales, a fin de prevenir en el futuro cualquier tipo de protesta (Salcedo, 2013). En octubre de 2011 la protesta se trasladó a las ciudades de la mano del movimiento estudiantil (Cruz, 2012). Las movilizaciones se articularon en contra de la propuesta del gobierno de reformar la Ley 30 de 1992, que regula el sistema de educación superior, presentada por Santos el 10 de marzo. El proyecto se centraba en la atracción de la inversión privada a las universidades públicas y el establecimiento de Instituciones de Educación Superior (IES) con ánimo de lucro. Esto generó profundo descontento entre directivas y estudiantes de universidades públicas y privadas que veían en tales medidas una privatización de la educación, la lesión a la autonomía universitaria, el privilegio de la cobertura sobre la calidad y la concepción de la educación como negocio y no como derecho.

Las principales organizaciones estudiantiles nacionales se articularon en torno a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) creada en un encuentro nacional estudiantil los días 19 y 20 de marzo en Bogotá, que definió los derroteros de la protesta y la plataforma discursiva del movimiento sintetizada en el Programa Mínimo de los Estudiantes. La situación de efervescencia estudiantil en distintas universidades regionales se empezó a articular a nivel nacional en el segundo semestre del año, de tal forma que cuando el gobierno radicó el proyecto de reforma en el Congreso, el 3 de octubre, cuarenta universidades se declararon en paro. Desde ese momento, el movimiento estudiantil desarrolló grandes movilizaciones a nivel nacional en las que sobresalieron los repertorios pacíficos, lúdicos y creativos, como las “besatones” y “abrazatones”, que involucraron incluso miembros de la fuerza pública. Todo ello le granjeó un gran respaldo social al movimiento, cuyos voceros además dieron la impresión de derrotar con argumentos a los representantes del gobierno en varios eventos públicos. En fin, el gobierno se vio obligado a retirar la propuesta de reforma el 10 de octubre, lo que fue interpretado por los

estudiantes como una victoria parcial en el proceso de construcción de una reforma alternativa.

Las movilizaciones retornaron en febrero de 2012, cuando los pobladores de distintos municipios emprendieron protestas contra megaproyectos hidroeléctricos y mineros. En El Quimbo (Departamento del Huila) se produjeron grandes movilizaciones por parte de habitantes de la zona, campesinos y pescadores, contra el proyecto hidroeléctrico que pretende desviar parte Río Magdalena generando consecuencias negativas a nivel social y ambiental (Restrepo, 2012). Asoquimbo organizó la protesta contra el proyecto Emgesa, que afecta siete municipios del Departamento del Huila y amenaza con la inundación de 6 mil hectáreas cultivables y el consiguiente despojo de las tierras. Los repertorios incluyeron mítines y enfrentamientos con la fuerza pública. Estas escenas prácticamente se repitieron por los mismos días en otras partes del país, en contra de los proyectos Hidrosogamoso e Hidoituango, sin que en ninguno de los casos se llegase a un acuerdo.

Por esos días también se presentaban protestas contra los megaproyectos mineros. Habitantes de los departamentos de Quindío y Tolima, protestaron contra la explotación de oro en Cajamarca por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti. En Santurbán se produjeron protestas contra Eco Minerals (antigua Greystar) para exigir la suspensión de la explotación de oro a fin de proteger el páramo del mismo nombre. En Puerto Asís y Villa Garzón la protesta se dirigió contra la multinacional Emerald Energy, y en el suroeste antioqueño contra Anglo Gold Ashanti y el proyecto hidroeléctrico de Pescadero-Ituango (Restrepo, 2012, p. 30).

El 12 de julio de 2012 se produjeron graves altercados entre miembros del ejército e indígenas de la comunidad Nasa. El movimiento indígena en el norte del Departamento del Cauca protestó para demandar la desmilitarización de sus territorios, tanto por parte de la fuerza pública como de los actores armados ilegales. Miembros del gobierno, incluyendo al presidente Santos, acusaron a sectores de las organizaciones indígenas de ser auxiliadores o estar infiltrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Vásquez, Rincón, Yepes, 2012, p. 6). Todo ello desató un debate nacional sobre problemas como la soberanía y la extraterritorialidad, la autonomía indígena e, incluso, el racismo que persiste en el Estado y la sociedad frente a las comunidades indígenas.

En agosto de 2012 revivió el conflicto entre multinacionales, trabajadores y pobladores en Puerto Gaitán (Meta). Los trabajadores de las electrificadoras CEPSA Colombia S.A. y la contratista de Ecopetrol Termotécnica Coindustrial, presentaron un pliego de peticiones demandando el respeto a los derechos laborales, condiciones higiénicas de trabajo, mejoras en la alimentación, horarios y remuneración justas, y respeto por el derecho de sindicalización, entre otros. Las empresas no accedieron a negociar el pliego, por lo que el 7 de septiembre los trabajadores bloquearon las carreteras hacia varios campos petroleros (Apiay,

Chichimene, Castiya, Cabuyaro y Pacific Rubiales), lo que condujo a enfrentamientos con la fuerza pública. Los trabajadores se declararon en asamblea permanente y, con apoyo de la USO, desarrollaron un paro cívico en el Meta, que articuló demandas de otros actores regionales en contra del enriquecimiento de las multinacionales a costas del medio ambiente, el abandono estatal en cuanto a política social y la exigencia de la consulta previa a las comunidades campesinas y étnicas, entre otros (Restrepo, García, 2013, p. 59).

Dos meses más tarde, entre el 4 y el 12 de octubre, distintas organizaciones sociales del país desarrollaron la “semana de la indignación” (Restrepo, García, 2013). Bajo el eslogan de “Paz con justicia social” se articularon organizaciones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, la Minga Nacional Indígena, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinadora Nacional Agraria, entre otros. En distintas ciudades se desarrollaron movilizaciones pacíficas y actos culturales para posicionar en el escenario público la necesidad de “paz con justicia social” y denunciar la creciente desigualdad del país, la pobreza, la opresión, la discriminación, la mercantilización de los servicios de salud y educación, y el alto costo de los servicios públicos, así como la extranjerización de la propiedad agraria y las consecuencias negativas de la denominada “locomotora minero energética”. De esa forma, se posicionó a nivel nacional el significante de la “indignación”, que había caracterizado a principios de año protestas en otros países, principalmente en España.

Tres meses después, en diciembre, los funcionarios de la Rama Judicial entraron en un paro indefinido, demandando fundamentalmente un ajuste salarial que, según ellos, se había aplazado durante décadas. El paro llevó al colapso de la justicia y se prolongó por cerca de un mes. Al final, el gobierno se vio obligado a negociar y ceder frente a las demandas de los manifestantes.

En el 2013 los niveles de protesta se incrementaron, así como su capacidad de afectación nacional. Entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de 2013, en Colombia tuvo lugar la protesta más importante en la historia del gremio cafetero, el Paro Nacional Cafetero. A él se vincularon más de 100 mil caficultores de 10 departamentos, quienes hicieron escuchar sus demandas mediante marchas, concentraciones y, sobre todo, el bloqueo de vías principales. La protesta provocó una crisis de gobernabilidad sin precedentes en la historia reciente, las afectaciones de la movilidad se tradujeron en el desabastecimiento y el incremento de los precios de bienes de primera necesidad en algunas ciudades, generando enormes pérdidas económicas. El desencadenante de la protesta fue la crisis sin precedentes del sector cafetero. Sin embargo, la magnitud que alcanzó no hubiera sido posible sin un proceso previo de organización, en el marco del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, que permitió planear y desarrollar acciones colectivas sostenidas, implementar unas estrategias discursivas para articular distintos actores a su lucha y aprovechar de esa forma las oportunidades políticas coyunturales.

Su pliego de peticiones contenía ocho puntos referidos a la fijación de un precio remunerativo estable e independiente del precio internacional del café, políticas de fomento a la producción cafetera nacional, el rechazo al incremento de impuestos a los caficultores, el control al precio de agroinsumos, una auditoría al Fondo Nacional del Café y un diagnóstico del funcionamiento de las instituciones del gremio, solucionar el problema de deuda de los caficultores, incentivar programas gratuitos de control de plagas y rechazo al TLC con EEUU por permitir el ingreso de cafés procesados y lesionar la soberanía nacional (Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros Colombianos, 2012). Andando la protesta se sumó un noveno punto: el rechazo a la minería en zonas cafeteras.

El paro fue apoyado desde su comienzo hasta el 5 de marzo por los transportadores de carga y en forma permanente por otros sectores del agro como los productores de papa, leche, cacao y arroz en distintos departamentos. Aunque, como en anteriores oportunidades, el gobierno afirmó que no negociaría bajo la presión de los bloqueos a las vías principales, finalmente el 5 de marzo designó un equipo de alto nivel, compuesto por el Vicepresidente Garzón y los ministros de agricultura, salud, interior, defensa y otros funcionarios, algunos gobernadores, quienes discutirían con 32 delegados de los caficultores, provenientes de varios departamentos y comunidades indígenas, que exigían un precio de sustentación de \$750.000 (El Tiempo, 2013a).

Finalmente, el 7 de marzo las partes llegaron a un acuerdo. Se fijó un subsidio de 145 mil pesos por carga de café, que en vez de precio de sustentación sería denominado "Protección al Ingreso de los Caficultores". Respecto al precio, se estableció un techo de \$700.000 por carga y un piso de \$480.000 mil (El Espectador, 2013a). Ese apoyo sólo estaría vigente durante 2013, hasta que el sector se recuperase. Aunque se acordó que el gobierno mediaría ante la Fiscalía para evitar la judicialización de los detenidos durante las manifestaciones y los enfrentamientos con la fuerza pública, finalmente se continuaron los procesos judiciales (Caracol, 2013). A fin de discutir los demás ítems del pliego de peticiones, como el control de precios de fertilizantes e insumos e importaciones de grano y la erradicación de la minería en las zonas de cultivo, se crearon comisiones de trabajo (Escobar, 2013a).

Aunque el paro fue un duro golpe a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), su gerente no renunció. No se definió si a la constituyente cafetera que propuso el gobierno asistirán sólo los representantes de la FNC o también los nuevos líderes. Tampoco se tocó el problema que para los caficultores era de fondo: el libre comercio y el modelo de acumulación basado en la minería. No obstante, los caficultores lo vieron como una victoria.

Con demandas y expectativas muy similares, en mayo los productores de papa de Boyacá y Cundinamarca también desarrollaron un paro. La producción de papa nacional cayó vertiginosamente a consecuencia de la baja en el precio, las importaciones del producto de mejor calidad y más bajo precio debido al TLC

con EEUU y los altos costos de producción por los elevados precios de los agroinsumos, entre otros aspectos. El Comité por la Dignidad y la Soberanía del Sector Papicultor de Colombia, señaló la necesidad de proteger la producción nacional, mediante controles a la importación, precios de sustentación y seguros por cosecha, que impidan la pérdida de capital de los papicultores y el consiguiente remate de sus propiedades por parte de las entidades crediticias (Kavilando, 2013). El paro se caracterizó por los enfrentamientos con la fuerza pública, lo que dejó un saldo de 70 detenidos y 16 personas heridas. Días después, el gobierno y los representantes de los pequeños productores llegaron a un acuerdo que comprendía un apoyo de cuarenta mil millones de pesos al sector (El Colombiano, 2013a).

Otra protesta campesina tuvo lugar en junio de 2013, esta vez en la región del Catatumbo. Allí, la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), inició una manifestación en contra de la erradicación forzada de cultivos ilícitos que pronto dio paso a una agenda de peticiones que denunciaba el abandono estatal de la región y demandaba la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC). Más de 4000 campesinos bloquearon la vía que conduce desde Tibú hasta Cúcuta, en el Departamento de Norte de Santander, durante 56 días (El Herald, 2013), en los que tuvieron que enfrentar el rigor de la represión por parte de la fuerza pública y las acusaciones del gobierno según las cuales la protesta estaba dirigida por las FARC (El Tiempo, 2013b), aunque la propuesta de formalizar allí una ZRC venía de mucho antes de que se iniciaran los diálogos de paz de La Habana (Restrepo, 2013).

Al principio Santos se negó, como lo había hecho en anteriores protestas, a dejarse presionar por las “vías de hecho” (El Espectador, 2013b). No obstante, luego accedió a la negociación mediante personas que conocían de cerca la zona como el Alto Consejero para el Diálogo Social, Luís Eduardo Garzón, y el mismo Vicepresidente, Angelino Garzón, que no arrojaron resultados positivos. Las jornadas de protesta dejaron cuatro personas muertas y más de un centenar de heridos, con lo que se constató un viraje del gobierno hacia el aumento de la represión (El Tiempo, 2013c). No obstante, a principios de agosto los negociadores del gobierno y los representantes del campesinado llegaron a un acuerdo para suspender los bloqueos y proceder a negociar. Entonces se trazó una agenda de negociación que se pactó para un mes y que recoge demandas desde subsidios a las familias que dependen de los cultivos ilícitos como condición para su erradicación hasta la zona de reserva campesina (Semana, 2013a).

Para ese momento ya existía otro polo de protesta en el país, pues en julio los mineros artesanales de distintas regiones del país también emprendieron un paro en protesta por la criminalización de su trabajo, que se asocia frecuentemente a mafias y grupos armados ilegales, así como por la preferencia del gobierno hacia las multinacionales que los desplazan del negocio sin generar beneficios para las comunidades locales. Cerca de doscientas mil personas asociadas a la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol)

protestaron en al menos diez departamentos: Chocó, Guainía, Antioquia, Caldas, Risaralda. Sus demandas, sintetizadas en un pliego de peticiones de 15 puntos, se centraban en derogar el Decreto 2235 de 2012 mediante el cual se autoriza a la fuerza pública para incautar maquinaria pesada utilizada en la minería ilegal, así como en la petición de políticas sociales y económicas para el sector y protocolos para diferenciar la pequeña minería ilegal de las bandas criminales. Su repertorio también fue el bloqueo de vías principales, el gobierno consiguió acuerdos en algunas regiones del país, pero el descontento se mantuvo en la zona norte del departamento de Antioquia.

Tanto las negociaciones en el Catatumbo como el paro minero fueron opacados por el paro nacional agrario que inició el 19 de agosto. Esta protesta fue convocada por organizaciones de alcance nacional (Mantilla, 2013), ante el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos con los sectores cafeteros y los productores de papa, como la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria, que agrupa los movimientos por la dignidad arrocera, cafetera, cacao, panelera y papera, y que rechaza los acuerdos de libre comercio, demanda subsidios a los productos campesinos, el desmonte de los aranceles para los agroinsumos importados y el cumplimiento de acuerdos anteriores por parte del gobierno. Otra organización convocante fue la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, que reúne varias organizaciones, entre ellas la Marcha Patriótica, y cuyas demandas se resumen en acceso a tierra y territorio para los campesinos, concertación de la política minera con las comunidades locales, inversión social y garantía de los derechos políticos, entre otras. Finalmente, en la convocatoria al paro también participa el Coordinador Nacional Agrario, que comprende treinta organizaciones de 10 departamentos, entre ellas el Congreso de los Pueblos, y tiene una plataforma programática basada en el rechazo a la gran minería y la protección de la minería tradicional, el rechazo de los TLC en nombre de la soberanía alimentaria y la condonación de deudas a pequeños productores, entre otros.

En los primeros días de la protesta, el gobierno trató de reducir al máximo su alcance, al menos en los medios de comunicación (La Silla Vacía, 2013a) y desplegó una serie de estrategias para desmovilizar la base del paro en las regiones, como la criminalización a los bloqueos por parte de los transportadores de carga, que en el Departamento del Valle llevó a 25 judicializados tan sólo en el primer día de paro. En forma simultánea, el presidente Santos instó a ejercer el derecho a la protesta de modo pacífico y afirmó que el paro no tenía el alcance que se había imaginado (El Tiempo, 2013d). Días después afirmó tajantemente “el tal paro nacional agrario no existe”, con lo cual los ánimos se caldearon y las protestas, principalmente los bloqueos de vías principales, aumentaron hasta tal punto que el mandatario tuvo que retractarse (El País, 2013).

Al décimo día de paro, el gobierno accedió al establecimiento de mesas de diálogo en la ciudad de Tunja. Pero, ya para este momento la protesta se había generalizado a distintas regiones del país, principalmente a la Capital de la

República. Así, el 26 de agosto hubo un “cacerolazo” en Bogotá, en horas de la noche, que congregó miles de personas en la Plaza de Bolívar con la consigna de apoyar el paro campesino. Este repertorio ya se había producido unos días antes en Tunja y otros municipios. Sin embargo, el descontento por la represión y por las afirmaciones de miembros del gobierno según las cuales el paro estaba nuevamente infiltrado por las FARC, llevó a un incremento de la protesta.

El 29 de agosto, la ciudad fue paralizada por marchas de distintos sectores, trabajadores de las centrales obreras - Central General de Trabajadores de Colombia y Central Unitaria de Trabajadores -, estudiantes de la MANE, así como ciudadanos de a pié, en apoyo al paro campesino. Al mismo tiempo, se presentaron actos de vandalismo en distintas localidades que arrojaron un saldo de tres muertos, miles de millones de pesos en pérdidas y la militarización de la ciudad. Al día siguiente, 30 de agosto, el presidente, quien en una alocución televisada hizo equivalentes los actos vandálicos con las protestas campesinas, decidió suspender las negociaciones. Los representantes de los campesinos en la mesa de negociaciones, por su parte, decidieron mantenerse en paro pero suspender los bloqueos a fin de impedir más actos vandálicos y la consiguiente represión de la fuerza pública, a la espera de iniciar nuevamente las conversaciones el sábado 31 de agosto (El Espectador, 2012).

Esta protesta consiguió un inusitado apoyo en las ciudades, tanto de pobladores urbanos como de distintos sectores sociales como los transportadores, los obreros, los estudiantes y los trabajadores del sector salud. Estos últimos estaban inconformes con la Ley Estatutaria que pretende reformar la Ley 100 y el proyecto de ley ordinaria en ese momento en discusión en el Legislativo. Para ellos es inconstitucional subordinar el derecho a la salud a la disponibilidad fiscal como lo ha hecho el gobierno (Semana, 2013b). Quizás fue por eso que el gobierno se vio obligado a negociar. El viernes 6 de septiembre definió una agenda de negociación para un mes con el CNA, al día siguiente se consiguió un acuerdo con Dignidad Agropecuaria y el domingo 8 de septiembre se firmó un acuerdo con la MIA para avanzar en las negociaciones del pliego de peticiones, lo que implicaba suspender los bloqueos de vías principales y conformar una comisión de alto nivel con veeduría de la ONU. Como resultado de la protesta, el gobierno convocó para el 12 de septiembre lo que denominó el Gran Pacto Agrario, que reúne grandes y medianos productores. El mismo día el CNA, la MIA y Dignidad Agropecuaria se reunieron en el marco de la Cumbre Agraria y Popular (Salcedo, Pinzón, Duarte, 2013).

El incumplimiento del gobierno motivaría la reactivación de la protesta justo en la época de campaña electoral. En efecto, el proceso de unidad enmarcado en la Cumbre Agraria prosiguió con una serie de reuniones en distintos lugares del país y con el trabajo de varias comisiones preparatorias de una reunión nacional que se llevó a cabo el 13 de marzo de 2014 en Bogotá. La Cumbre, donde confluyeron doce procesos organizativos (ver cuadro 1) produjo un Pliego de Exigencias con un total de 8 puntos que tocaban diversos aspectos de política agraria, minera y territorial, el modelo de desarrollo económico, la

solución al conflicto social y armado, el respeto por los derechos humanos, alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política de las organizaciones populares (Rebelión, 2014). También se decidió realizar un paro a partir del 28 de abril.

Cuadro 1. Protesta social bajo el gobierno Santos (2010-2014)

Fecha	Protesta	Promotores	Alcance geográfico	Repertorios	Demandas	Duración
Febrero de 2011	Paro de transportadores de carga	Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y Asociación Colombiana de Transportadores de Carga (ATC)	Centro y suroccidente del país.	Bloqueo de vías principales	Regulación de precios del transporte de carga.	Menos de una semana.
Septiembre de 2011	Paro de Trabajadores Petroleros	Trabajadores no organizados y apoyados por la Unión sindical Obrera.	Puerto Gaitán (Meta)	Bloqueo de vías principales, cese de actividades.	Mejoramiento de las condiciones de trabajo y exigencia de respeto por los derechos laborales.	Varios meses.
Octubre de 2011	Paro nacional universitario	Mesa Amplia Nacional Estudiantil	Nacional	Marchas, actividades culturales, besatones, abrazatones.	Retiro del proyecto de reforma a la educación superior y construcción de una reforma concertada que responda a las necesidades del país.	Más de un mes.
Febrero de 2012.	Protestas contra mega proyectos hidroeléctricos y mineros.	Asociaciones de pobladores urbanos y semiurbanos.	Departamentos de Huila, Tolima, Quindío, Boyacá, Putumayo.	Marchas, bloqueo de vías principales.	No a los megaproyectos, no a las transnacionales.	Varios meses.
Julio de 2012	Protestas del movimiento indígena en el norte del Cauca	Organizaciones indígenas Nasa	Departamento del Cauca	Marchas, expulsión de fuerza pública y grupos armados ilegales.	Respeto a la autonomía territorial, contra el racismo, por la paz.	Más de una semana.
Agosto de 2012	Protestas de trabajadores de multinacionales electrificadoras	Trabajadores, pobladores urbanos, USO.	Puerto Gaitán (Meta)	Marchas, bloqueos de vías principales.	Derecho a la sindicalización, derechos laborales, condiciones humanas de trabajo.	Más de una semana
Octubre de 2012	“Semana de la indignación”	Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Mesa Amplia Nacional	Nacional.	Marchas, mítines, actividades culturales.	“Paz con justicia social”, contra la desigualdad, la pobreza, la opresión, las	Una semana.

		Estudiantil, Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, Minga Nacional Indígena, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y Coordinadora Nacional Agraria.			consecuencias negativas de la “locomotora minero energética”.	
Diciembre de 2012	Paro de trabajadores de la Rama Judicial.	Asonal Judicial.	Nacional	Cese de actividades, mítines.	Reajuste salarial	Un mes.
Febrero-marzo de 2013	Paro Nacional Cafetero	Movimiento por la Defensa la Dignidad de los Caficultores.	Nacional	Marchas, mítines, bloqueo de vías principales.	Fijación de un precio remunerativo estable e independiente del precio internacional del café, políticas de fomento a la producción cafetera nacional, no al incremento de impuestos a los caficultores, control al precio de agroinsumos, una auditoría al Fondo Nacional del Café y un diagnóstico del funcionamiento de las instituciones del gremio, solucionar el problema de deuda de los caficultores, incentivar programas gratuitos de control de plagas y rechazo al TLC con EEUU por permitir el ingreso de cafés procesados y lesionar la soberanía nacional.	Más de una semana
Mayo de 2013	Paro de pequeños productores de papa	Comité por la Dignidad y la soberanía del sector papicultor	Departamentos de Boyacá y Cundinamarca.	Marchas, bloqueos de vías principales.	Proteger la producción nacional, mediante controles a la	Menos de una semana

		de Colombia			importación, precios de sustentación y seguros por cosecha, que impidan la pérdida de capital de los papicultores y el consiguiente remate de sus propiedades por parte de las entidades crediticias	
Junio de 2013	Paro Campesino en el Catatumbo	Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat)	Región Catatumbo	Bloqueos de vías principales.	Contra de la herradicación forzada de cultivos ilícitos, denuncia del abandono estatal de la región y por la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC)	Cerca de dos meses.
Julio de 2013	Paro de pequeños mineros artesanales	Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol)	Nacional	Bloqueos de vías principales	Protesta por la criminalización de su trabajo, que se asocia frecuentemente a mafias y grupos armados ilegales, así como por la preferencia del gobierno hacia las multinacionales que los desplazan del negocio sin generar beneficios para las comunidades locales.	Más de un mes.
Agosto-Septiembre de 2013	Paro Nacional Campesino	Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, Coordinador Nacional Agrario.	Nacional	Bloqueos a vías principales, marchas, mítines, actividades culturales, cacerolazos.	Rechazo a los acuerdos de libre comercio, demanda subsidios a los productos campesinos, quitar los aranceles para los agroinsumos importados y el cumplimiento de acuerdos anteriores por parte del gobierno, acceso a tierra y territorio para los campesinos, concertación de la política minera con las comunidades	Más de una semana.

					locales, inversión social y garantía de los derechos políticos, rechazo a la gran minería y protección de la minería tradicional, por la soberanía alimentaria y la condonación de deudas a los pequeños productores.	
Abril-Mayo de 2014	Paro Nacional Agrario	Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la cual congrega: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Congreso de los Pueblos, Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, Coordinador Nacional Agrario (CNA), Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA), Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC), Proceso de Comunidades Negras (PCN), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), Mesa de Unidad Agraria (MUA) Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y Movimiento por la Constituyente Popular (MCP)	Nacional	Bloqueos a vías principales, marchas, mítines, actividades culturales, cacerolazos	8 puntos que tocan diversos aspectos de política agraria, minera, territorial, el modelo de desarrollo económico, la solución al conflicto social y armado, el respeto por los derechos humanos, alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política de las organizaciones populares.	Dos semanas

Unos días antes de la fecha indicada, el gobierno trató por todos los medios de conjurar el paro, pero no lo logró. Aunque el mismo 28 de abril se empezó a negociar, los diálogos se rompieron dos días después y sólo fueron retomados el 4 de mayo. Al día siguiente se logró un primer acuerdo, cuyo contenido principal era prorrogar hasta 10 años el plazo para amortizar las deudas a los campesinos que adeudaran menos de 20 millones de pesos (El Espectador, 2014a). Hubo movilizaciones en al menos 10 departamentos y bloqueos con enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública en vías como La Calera-Bogotá y Bogotá-Tunja. Con todo, el paro no tuvo el mismo poder que la protesta del año anterior, pues si bien logró convocar un proceso unitario en el marco de la Cumbre, el contexto electoral motivó críticas de actores representativos como la ex senadora y dirigente de Marcha Patriótica, Piedad Córdoba, quien sostuvo que la protesta podría amenazar el proceso de paz en La Habana (El Espectador, 2014b).

En fin, el 9 de mayo se llegó a un acuerdo para levantar el paro aunque en algunas regiones, aquellas donde hacen presencia las “dignidades agropecuarias”, solamente fue suspendido mientras se desarrollaban las elecciones presidenciales. No obstante, el comunicado de la Cumbre Agraria destacó la negociación como un triunfo (Rebelión, 2014b), resaltando “el reconocimiento de la Cumbre Agraria como actor político en la definición de la política pública para el agro colombiano que abordará los 8 ejes de nuestro pliego de exigencias”.

Las estrategias de contención del gobierno

El gobierno utilizó tres grandes estrategias de contención para enfrentar las protestas. En primer lugar, le apostó al desgaste de los manifestantes. Para eso acudió a un discurso tradicional en las élites políticas colombianas que es el de no transigir ante el uso de las “vías de hecho”. En segundo lugar, hubo un uso táctico de los medios de comunicación que buscó deslegitimar las demandas de los manifestantes, en muchos casos mediante la criminalización de la protesta, un discurso que asocia la protesta social a la manipulación de los ciudadanos por parte de las guerrillas. Finalmente, cuando las protestas habían escalado y persistido por varios días e incluso semanas, el gobierno optó por negociar usando la figura del vicepresidente. En éste caso, se trató prácticamente de un “libreto” que se puso en práctica desde el paro de camioneros en febrero de 2011: al principio el gobierno se negaba a negociar bajo presión, pero cuando la situación se tornaba inmanejable, intervenía el vicepresidente. Esta estrategia funcionó prácticamente siempre que se implementó para conseguir el fin de las manifestaciones, excepto con las protestas en el Catatumbo, en julio de 2013. Sin embargo, esa estrategia también redundó en varias derrotas, en particular frente al paro universitario y el paro cafetero.

Aunque desde el mismo momento en que se presentó públicamente la propuesta de reforma, el 10 de marzo, los estudiantes y otros actores de la educación superior manifestaron su desacuerdo con esa medida y con el hecho de que no fuese construida de forma concertada, el gobierno esperó a que se declarara el paro. Frente al paro universitario, el mismo 3 de octubre de 2011, luego de la radicación del proyecto de ley para la reforma de la educación superior, el Presidente afirmó que no aprobar la reforma sería “la peor noticia”, que no encontraba razones para protestar y no cedería ante la presión de la protesta (El Tiempo, 2011b). El paro también trató de deslegitimarse resaltando sus altos costos y con el llamado para que la discusión sobre la reforma se hiciera en el Congreso, en vez de en las calles (Semana, 2011a).

Una situación similar se experimentó en el caso del paro cafetero. Aunque los caficultores plantearon demandas al gobierno un año antes de la protesta, en febrero de 2012, nunca fueron escuchados (Moir, 2013). Sin embargo, luego de que empezó el paro, el gobierno afirmó estaba dispuesto a escuchar las demandas de los caficultores y por ello las vías de hecho eran inadmisibles. En la mañana del 25 de febrero, el presidente Santos hizo una alocución televisada en la que calificó el paro como “injusto e innecesario” y ordenó no permitir bloqueos de vías. Al tiempo defendió la gestión de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). El ministro de agricultura, por su parte, afirmó que dado que los líderes de la protesta no querían negociar, el gobierno lo haría con la FNC. Esta decisión pretendía deslegitimar los organizadores de la protesta, se sustentaba en que no seguía los cauces institucionales, supuestamente era expresión de una minoría y estaba infiltrada por las FARC (El Tiempo, 2013e).

En suma, el gobierno ha optado por permitir que la protesta y el descontento crezcan antes que por anticiparlos. Por otra parte, las últimas protestas del 2013 y 2014 permiten inferir, como se verá más adelante, que con el correr del tiempo el gobierno ha virado desde un tratamiento conciliador de la protesta hacia el endurecimiento de la represión.

Para comprender el auge de la protesta social

El enfoque de los procesos políticos comprende dimensiones estructurales y subjetivas para explicar la acción colectiva (Tarrow, 1997; McAdam, McCarthy, Zald, 1999). La dimensión estructural está comprendida en la estructura de oportunidad política (EOP) que designa características contextuales que facilitan o elevan los costos de la acción colectiva. Las dimensiones subjetivas comprenden las estructuras de movilización –los canales colectivos que permiten a las personas implicarse en la acción colectiva– y los marcos de acción colectiva –representaciones de la realidad que producen un sentido a la acción.

De Uribe a Santos: el contexto y las oportunidades políticas

La EOP hace referencia a elementos del contexto político que impulsan o constriñen la acción colectiva, al aumentar o disminuir los costos de la acción colectiva, descubrir aliados o evidenciar las vulnerabilidades de las autoridades (Tarrow, 1997, p. 49). Comprende tanto la estructura política formal como las relaciones informales de poder, las cuales se traducen en una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma y el impacto de la acción colectiva (McAdam, McCarthy, Zald, 1999, p. 23).

En el caso colombiano la EOP está configurada por el cambio entre los estilos de gobierno de Uribe y Santos. En primer lugar, éste último ha adoptado una retórica reformista acompañada de una actitud menos beligerante frente a la protesta social. Segundo, la retórica reformista entra en contradicción con ciertas políticas, como el apoyo al libre comercio y el impulso al modelo de acumulación basado en la extracción de materias primas. Tercero, desde el inicio del gobierno Santos existe una marcada división entre sus aliados y parte de las élites que apoyan al ex presidente Uribe. Finalmente, este panorama tiene en un escenario caracterizado por la deslegitimación del sistema político y el intento de forjar una apertura democrática del mismo en el marco del actual proceso de paz con las FARC. Todo lo anterior genera oportunidades para la protesta social, aún cuando sigan presentes la criminalización y la represión.

El proyecto de la “seguridad democrática” que abanderó Uribe (2002-2010) en contra de los procesos de paz iniciados en 1999 generó un enorme consenso entre las élites políticas nacionales y regionales de distintos partidos. Adicionalmente, el gobierno puso en práctica diversos mecanismos, desde campañas publicitarias para recuperar la seguridad y la “confianza inversionista” (Vignolo, Murillo, 2012) hasta mecanismos clientelares como los programas “Agro Ingreso Seguro” y “Familias en Acción”, a fin de mantener su legitimidad. Estas estrategias aseguraron que Uribe terminara sus dos mandatos presidenciales con una opinión favorable por encima del 70% y que hiciera lo posible por optar por un tercer mandato. Esa posibilidad se hizo realidad con la sanción de una ley que avalaba la segunda reelección consecutiva, en septiembre de 2009. Sin embargo, en febrero de 2010 la Corte Constitucional la declaró inconstitucional al hallar vicios de proceso en su promulgación. En consecuencia, Juan Manuel Santos, antiguo ministro de defensa tomó las banderas del uribismo erigiéndose en candidato de la continuidad.

No obstante, una vez electo presidente Santos imprimió una orientación distinta al gobierno. Por ejemplo, recompuso las relaciones con Ecuador y Venezuela, que se habían visto afectadas durante el gobierno Uribe (Wills, Benito, 2012, p. 90) y desarrolló reformas institucionales para reactivar ministerios que el anterior gobierno había suprimido (Salud, Justicia y Trabajo) o eliminar entidades que presentaban problemas de corrupción como la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Departamento Administrativo de Seguridad. Pero la ruptura no fue únicamente de estilo, puesto que Santos se orientó a reconocer la existencia del conflicto armado, que Uribe había concebido como

una “amenaza terrorista”, y a procurar la negociación con la insurgencia. En junio de 2011 se promulgó la Ley 1448, o Ley de Víctimas, para reparar y atender a las víctimas del conflicto armado interno, y el 29 de agosto de 2012 se firmó con las FARC el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que significó el inicio de conversaciones con ese grupo guerrillero en La Habana, Cuba. Adicionalmente, la retórica reformista del gobierno pretendió cambiar la “seguridad democrática” por la “prosperidad democrática” (Presidencia de la República, 2010), al trazarse como objetivo que el país hiciera parte de los países desarrollados y que produjo expectativas en distintos sectores sociales que empezaron a ver la oportunidad para hacer escuchar su voz por parte de las autoridades.

Bajo el gobierno de Santos no hubo una ruptura en relación con la forma como tradicionalmente el Estado colombiano ha hecho frente a la protesta social: el tratar a los distintos manifestantes como “minorías” privilegiadas, la criminalización al asociar la protesta con la insurgencia armada y la represión. A diferencia de lo que predicen autores como della Porta (1999, p. 102) o McAdam (1999, p. 58), según los cuales cuando disminuye la represión es más probable que emerjan las protestas, en Colombia la represión se ha mantenido en sus niveles tradicionales. Incluso en éste gobierno se impulsó una legislación favorable a la represión. De ahí que en los distintos eventos contenciosos la Policía justifique su proceder como forma de dar cumplimiento a la nueva ley de seguridad ciudadana que penaliza los bloqueos de vías públicas (El Colombiano, 2013b), y de esa manera prácticamente prohíbe la protesta¹. Sin embargo, incluso el cambio retórico por parte del gobierno, en comparación con la beligerancia y estigmatización de las organizaciones sociales durante el gobierno anterior, puede llevar a las personas a hacer una lectura favorable del contexto que las impulsa a la movilización. Además, en el contexto de las negociaciones de paz los beneficios potenciales de la movilización pueden ser superiores a sus costos en términos de represión. En otras palabras, el escenario de las negociaciones abre oportunidades para posicionar distintos temas en la agenda pública.

Por otra parte, ciertas políticas del gobierno Santos contradicen su política reformista y pacifista en la medida en que ahondan problemas que están en la base del conflicto armado. Muchas de las protestas durante este gobierno

¹ La Ley de seguridad ciudadana (Ley 1453 de 2011) en su artículo 353A “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”, declarado exequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-742 de 2012), afirma: “El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Parágrafo. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política”.

cuestionan radicalmente el modelo de acumulación basado en la extracción de recursos naturales. Como ha sido ampliamente demostrado, ese modelo no genera ningún beneficio para el país (Hernández, 2013): la mayor parte de la riqueza que genera la “locomotora minera” no se queda en el país, y la poca que se queda por la vía de la especulación financiera genera enfermedad holandesa, lo que termina por acabar con el agro y la industria (González, 2013). Pero, además, produce problemas sociales y ambientales muy graves, que están detrás de la protesta: se contamina o se acaba con recursos naturales, se desincentiva la producción agropecuaria ocasionando crisis económicas y desempleo en las regiones. La crisis del sector agrario había sido predicha desde mucho antes de que se firmara el TLC con EEUU, porque mientras este país no eliminó los subsidios para sus productos agrícolas, Colombia sí tuvo que hacerlo. Como consecuencia, desde un comienzo se sabía que los más perjudicados con el tratado serían los pequeños productores campesinos, la soberanía y la institucionalidad democrática, pues las decisiones que atañen a la población colombiana las toman en otro lugar y el tratado condiciona la Constitución política (Umaña, 2011). En fin, la mayoría de las protestas han cuestionado el terco empeño del gobierno de ahondar en las políticas neoliberales mediante tratados de libre comercio carentes de mínima planeación que proponen mercantilizar incluso derechos como la educación y la salud (Torres-Tovar, 2011). El mismo empeño por conseguir la paz por la vía de la restitución de tierras a las víctimas se ve torpedeado porque el paramilitarismo, ahora denominado “Bandas Criminales”, no se desmovilizó en su totalidad y soporta la inequidad en la distribución de la tierra. Ello explica la constante violación de los derechos humanos y la ascendente tasa de asesinatos de los reclamantes de tierras. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2006 y 2011 la cifra asciende a 71 personas asesinadas y, en abril de 2012, sólo había una condena por tales hechos (Semana, 2012a). Las cifras van en aumento, según un informe del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Programa Somos Defensores, entre enero y junio de 2013 fueron asesinados 37 defensores de derechos, mientras en el mismo período del año anterior hubo 29 casos (Fundación Somos Defensores, 2013). A todo ello habría que aunar los fraudes que se han cometido para “lavar” las tierras conseguidas por medios ilícitos con argucias jurídicas que el gobierno pretende legalizar como una forma de incentivar la inversión en el campo (Semana, 2013c).

También contribuye a abrir oportunidades el antagonismo entre los sectores de la clase política que en el gobierno anterior sustentaron la hegemonía, entre los partidarios del expresidente Uribe y quienes acompañan a Santos. La “prosperidad democrática”, que se pretendía reemplazo de la “seguridad democrática”, no funcionó como significativo articulador de los sectores dominantes, y ya ni siquiera se escucha en boca del gobierno. Si bien las campañas comunicativas no se han abandonado, el nacionalismo retórico e icónico parece ceder el lugar a las dinámicas tradicionales de la maquinaria

política. Así, el cambio en el estilo de gobierno no sólo generó expectativas en los ciudadanos, sino también contribuyó a una división entre las élites políticas, que igualmente ha generado oportunidades para la protesta. Ello puede verse en el hecho de que el sector uribista se presentara como la oposición a Santos, acusándolo de traición, y que el mismo expresidente Uribe apoyara protestas de la magnitud del paro cafetero, al lado de sectores de izquierda como el Senador del Polo Democrático, Jorge Robledo (El Espectador, 2013c).

Otra consecuencia de la transición entre Uribe y Santos que contribuye a generar oportunidades para la protesta es la creciente deslegitimación del sistema político. Los sondeos de opinión informan que el presidente Santos no alcanza niveles de popularidad similares a los de su antecesor. Más allá de eso, la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, se ha visto gravemente afectada, paradójicamente, porque no se percibe una clara ruptura con las dinámicas indeseables del anterior gobierno. No se ha hecho justicia en la totalidad de escándalos que llevaron al sistema político a estos niveles de deslegitimación, ni se han sometido los responsables a la justicia o asumido su responsabilidad política. Como sostiene Oberschall (1999, p. 146), “la falta de legitimidad de un régimen es una clara oportunidad para los disidentes”. Lo que se constata en Colombia, donde pese a la gobernabilidad institucional que le garantizó al gobierno tener las mayorías parlamentarias en el marco de la Mesa de Unidad Nacional, que reunió los partidos de la coalición de gobierno, las protestas generaron ingobernabilidad.

Los procesos organizativos y los marcos de acción colectiva

Una de las premisas del enfoque de los procesos políticos para explicar la acción colectiva es que las personas no responden de forma “reactiva” frente al contexto. Por el contrario, toda protesta tiene un proceso consciente de interpretación de la realidad, unos objetivos y unas formas organizativas, por mínimas que sean. Así, además de las oportunidades políticas generadas por las características del contexto, para que se produzca la acción colectiva es necesario el agenciamiento de ciertas formas de organización y de procesos de comprensión e interpretación de la realidad: las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva.

El concepto de estructuras de movilización designa “los canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva” (McAdam, Mc-Carthy, Zald, 1999, p. 25). Comprende las formas organizativas y los “núcleos socioestructurales cotidianos de micromovilización”, grupos cuya función no es la movilización pero que pueden generarla (familias, redes de amigos, asociaciones, etc.) (McCarthy, 1999, p. 206). Una característica fundamental de las protestas en los tres años del gobierno Santos es la generación de nuevos procesos organizativos. Dentro de estos procesos cabe destacar, a manera de ejemplo, la creación de la MANE (Cruz, 2012), que sustentó la protesta estudiantil en el segundo semestre de 2011

y la formación del Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Caficultores, que a su turno sostuvo el paro cafetero.

El estudiantado tiene una rica vida asociativa: grandes organizaciones de carácter nacional, regional y local, “parches”, “combos” y colectivos. No todas estas estructuras tienen objetivos políticos, existen grupos culturales o académicos que se politizaron en el ciclo de protesta de 2011. La movilización masiva no hubiera sido posible sin la MANE, que aglutinó las principales organizaciones estudiantiles y se planteó como un espacio amplio donde podía participar cualquier estudiante. Un proceso en construcción resultado del aprendizaje de experiencias anteriores de unidad, como la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios (CNEU). La CNEU se creó, por iniciativa de las organizaciones de carácter nacional del momento, en el Congreso de Estudiantes de Bucaramanga, en 2003, para hacer frente a unos decretos del gobierno sobre acreditación y presupuesto y, entre otras cosas, desarrolló el paro de abril de 2005. Tenía como objetivo una organización gremial con unidad en lo organizativo, lo programático y la movilización, y se reunió hasta dos veces por semestre. Aunque podrían participar organizaciones locales y regionales y estudiantes no organizados, no se planteó como un espacio amplio sino de interlocución entre organizaciones. Luego del paro se produjeron desacuerdos entre ellas que terminarían por acabar con el proceso. Su última reunión fue en octubre de 2006 cuando las diferencias fueron inconciliables.

Desde 2007 se realizaron Encuentros Nacionales Estudiantiles Universitarios (ENEU), para coordinar movilizaciones coyunturales, por ejemplo, contra el Plan Nacional de Desarrollo de Uribe, en 2007, que obligaba a las universidades públicas a hacerse cargo de su pasivo pensional. Allí sólo participaban las organizaciones estudiantiles y no tenían perspectivas en lo programático y lo organizativo. A fines de 2009 se empieza a discutir la necesidad de un espacio de unidad, que llevó al Encuentro de Manizales, el 14 y 15 de abril de 2010, para enfrentar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 propuesta por el gobierno Uribe. Finalmente, el Encuentro de marzo de 2011 decide crear la MANE para enfrentar la reforma a la Ley 30. “Mesa amplia”, implica articular al estudiantado, no sólo universitario, más allá de las organizaciones e idearios, mayoritariamente de izquierda, y avanzar en la unidad programática y organizativa. En la MANE hacen presencia más de 300 procesos organizativos, pero el Encuentro donde se formó fue convocado por 9 organizaciones, cinco de carácter nacional².

² La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Federación Universitaria Nacional (FUN-Comisiones) y el Proceso Nacional Identidad Estudiantil, tienen alcance nacional. Las demás, Comuna Universitaria, Conciencia Crítica, Rebeldía Estudiantil Organizada (REO) y el Colectivo Yuca Brava, tienen un alcance local o regional (Prensa Universidad, 2011).

Un avance es el esfuerzo por superar el sectarismo entre organizaciones que, aunque comparten un ideario de izquierda, tienen diferencias ideológicas. El proceso de unidad en parte se explica por las presiones coyunturales, pues los protagonistas consideraron la propuesta de reforma a la Ley 30 como demasiado lesiva. Pero también influye la “maduración” o aprendizaje, a partir de sus experiencias durante el gobierno Uribe. Las grandes organizaciones han tenido un papel principal en la construcción de la MANE debido a la disposición de recursos materiales e información, y a ese aprendizaje, que les permite asumir tareas que no se lograrían de otro modo, desde la logística hasta análisis de largo plazo. Sin embargo, el ciclo de protesta generó un masivo crecimiento de los participantes, que desbordó las capacidades de las organizaciones para dirigir el proceso y generó problemas de coordinación y en la toma de decisiones. En menos de cuatro meses la MANE se constituyó como una estructura de coordinación para avanzar hacia la unidad del estudiantado. En este proceso tuvo que lidiar con el cuestionamiento a los mecanismos de toma de decisiones en las asambleas, la emergencia de un discurso antiorganización que reivindica los estudiantes no organizados o de organizaciones locales, la discusión sobre las vocerías nacionales y la articulación con procesos regionales, entre otras cosas.

En un sentido similar, el Paro Nacional Cafetero fue posible gracias al aprovechamiento de la infraestructura organizativa formal e informal del sector, así como de la formación del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, como instancia de coordinación que supo movilizar las redes de relaciones cotidianas del campesinado cafetero para orientarlas a la protesta. El sector cafetero dispone de una importante infraestructura gremial, lo que se traduce en importantes aprendizajes y acumulados en cuanto a acción colectiva. En muchos casos los comités municipales y departamentales de la FNC jugaron un papel destacado en la articulación de las bases de la protesta. Otro elemento importante son los altos niveles de democratización tanto de la organización gremial como de la forma como se han organizado durante más de un siglo los procesos de producción en las zonas cafeteras. De acuerdo con Arango (2013), existen 538 mil productores de café de menos de cinco hectáreas, que constituyen el 96% del total de productores, asentados en 631 municipios.

El Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, por su parte, se caracterizó por su informalidad y su función de coordinador. Sin embargo, logró poner en cuestión la representatividad y legitimidad de la FNC, que tomó partido a favor de las propuestas del gobierno. El Movimiento se formó sobre la marcha para afrontar demandas muy específicas, sintetizadas en el pliego de peticiones y orientadas a responder a la crisis del sector cafetero. En ese trayecto consiguió desarrollar cuatro encuentros nacionales donde se planificaron las agendas y estrategias de movilización. La organización no tiene mayor distribución funcional, salvo la Mesa y el Comité Coordinador. El 3 de junio de 2012, en Riosucio Caldas, se realiza el Encuentro Regional Cafetero del Occidente de Colombia, con participación de más de 100 dirigentes, representantes de 700 municipios, congresistas, concejales, alcaldes y representantes del gobierno

departamental de Caldas. El objetivo era analizar la crisis del sector y tomar las medidas necesarias para superarla. Una de las decisiones del Encuentro fue crear la Mesa Nacional del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, una instancia de vocería para adelantar la lucha por el pliego de peticiones que se definió en ese mismo espacio (Moir, 2012a). El Comité Coordinador de Actividades, por su parte, fue constituido en el Tercer Encuentro Nacional del Movimiento, en Ibagué el 14 de septiembre, para desarrollar tareas concretas (Moir, 2012b).

Por otra parte, la carta abierta enviada al presidente Santos, luego de la movilización del 13 de agosto en Manizales, permite inferir el tipo de organizaciones que se aglutinaron en torno al Movimiento. Estaba firmada por representantes de departamentos, organizaciones y comunidades indígenas. Entre los departamentos: Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima, Cauca, Caldas, Huila; entre las organizaciones: la Mesa Amplia Intersectorial Cafetera de Antioquia, Asproinca, Unidad Cafetera y Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria; y las Comunidades indígenas de Riosucio (Caldas), Guambía (Silvia-Cauca) y Cristianía (Antioquia) (Moir, 2013b).

Quizás el carácter informal del Movimiento explique las diversas trayectorias de sus dirigentes. Algunos participaron en la organización independiente Unidad Cafetera o han ocupado cargos de elección popular, pero también hay líderes ajenos al mundo político. Un informe del diario El Tiempo, permite hacerse una idea de su trayectoria. En Caldas, Óscar Gutiérrez pertenece al Polo Democrático y tiene “20 años de vida política”; en Risaralda, Duberney Galvis, también pertenece al Polo; en Quindío, Dimas Alberto Arias, es presentado como “sin filiación política”; en Huila, coordinaron el excongresista del Partido Liberal Orlando Beltrán y el exconcejal conservador Armando Acuña; en Tolima, el exconcejal liberal Freddy Mosquera; en Cauca, Rubén Darío Cifuentes, que afirma no tener partido, pero fue secretario del Comité Municipal de Cafeteros de Piendamó; y en Antioquia, Guillermo Gaviria, comerciante que no ha aspirado a cargos de elección popular (El Tiempo, 2013f).

A nivel local, el paro corrió a cargo de las organizaciones de apoyo y las comunidades en general. Los lugares de protesta funcionaron con mecanismos de autogestión, los participantes debían aportar comida y determinados trabajos (Gutiérrez, 2013b). Si bien la organización básica consistió en comisiones espontáneas para atender distintas labores (comida, seguridad, aseo, derechos humanos, salud), esa espontaneidad se levantaba sobre fuertes vínculos sociales, fraternales y familiares. Ello permitió un alto nivel de planificación de las acciones y una elevada cohesión. Las formas de organización reprodujeron los lazos de vecindad producidos en la vereda, fundamentales a la hora de garantizar tareas como el transporte, la cocina y la seguridad.

Quizás este es un factor de ruptura en relación con el pasado reciente de nuestro país. Hoy en día pululan los procesos organizativos populares. Ante la desconfianza y la imposibilidad de hacer oír sus demandas por parte de las

autoridades públicas, las personas están buscando opciones para participar en la política, para realizarse como ciudadanos, y ello pasa por su organización. Las protestas que se han presentado han generado dinámicas de politización y enrolamiento de personas que anteriormente no contemplaban la movilización como una vía legítima para hacerse oír. Existe una clara recomposición organizativa en el campo popular palpable en las dinámicas de unidad que se han conseguido desde hace tres años en espacios como la Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos.

Por otra parte, el concepto de marcos de acción colectiva denota “esquemas interpretativos” mediante los cuales los participantes en un movimiento social conciben y explican el mundo (Snow, Benford, 1992, p. 137), “significados compartidos que impulsan a las personas a la acción colectiva” (Tarrow 1997, p. 57), y funciona como un correctivo al estructuralismo de ciertos enfoques. Resalta la importancia de la cultura en los procesos de movilización, pues parte de una epistemología constructivista donde los significados son construidos socialmente y los intereses materiales no se traducen por sí mismos en guías para la acción (Tarrow, 1999, p. 209). Presta atención al papel activo de los actores pues “tanto la cultura como el proceso enmarcador de ideas se conciben estratégicamente” (Zald, 1999, p. 369).

El objetivo de los marcos es *“forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismos que legitimen y muevan a la acción colectiva”* (McAdam, McCarthy, Zald, 1999, p. 27). Los procesos de enmarcado implican un conflicto entre distintas visiones del mundo, formas de explicar los problemas, soluciones y cursos de acción. Esta disputa tiene lugar tanto en el interior de los movimientos como en su ámbito externo, pues los marcos son cuestionados por espectadores, funcionarios estatales o contramovimientos (Zald, 1999, p. 370; Rivas, 1998, p. 207). De su desenlace depende la efectividad del marco. Analizar un marco de acción colectiva implica identificar: (1) el diagnóstico de la realidad, porqué las cosas no son como deberían ser y quiénes son los responsables, el antagonismo; (2) la identidad, o la autodefinición de un “nosotros” a partir de articulaciones, que están de acuerdo con (3) una solución a los problemas, un deber ser en función del cual se produce la acción colectiva. Retomemos una vez más a modo de ejemplo los marcos del movimiento estudiantil y del paro cafetero.

En el discurso del movimiento estudiantil el principal antagonista es el gobierno, cuyo proyecto pretende reducir la educación a una mercancía subordinada a los criterios del mercado global, en vez de constituirla como un derecho según criterios de pertinencia para las necesidades del país. La lucha no es sectorial, se proyecta como lucha del pueblo colombiano, articula la diversidad del estudiantado y otros sectores populares. El diagnóstico permite al movimiento atribuir responsabilidades y definir sus antagonistas: las políticas del gobierno Santos profundizan el modelo neoliberal, que reduce la educación a una mercancía en lugar de concebirla como un derecho. Existe un “marco

maestro” estructurado por el derecho a la educación³. El principal antagonista es el gobierno y su modelo de educación que se proyecta a un modelo de país donde se profundiza la desigualdad social. Esto se expresó con consignas como: “Las universidades públicas no son empresas” y “Ni Ley 30 ni reforma”.

La lucha del movimiento estudiantil no se plantea como una lucha gremial, sino se proyecta para representar los intereses de la sociedad colombiana. Así intenta articular diversos sectores, no sólo los estudiantes y universitarios. El discurso del movimiento intenta articular los demás estudiantes, de universidades públicas y privadas, técnicas y tecnológicas, de secundaria: “La embestida oficial en contra de la universidad y de los estudiantes hace indispensable la unidad del conjunto de procesos y vertientes existentes al interior del movimiento estudiantil, el cual fortalecido con dicha pluralidad, ahondará esfuerzos por derrotar el cúmulo de medidas que niegan la existencia de una educación pública y que hace muy oneroso estudiar en otro tipo de instituciones” (Prensa Universidad, 2011b).

En correspondencia con su diagnóstico, el deber ser que el movimiento plantea, condensado en el Programa Mínimo de los Estudiantes, es un proyecto de país donde la educación juega un papel importante en la generación de igualdad, inclusión y oportunidades. Traza una política cultural (Escobar, et. al. 2001, p. 25) que desafía los significados hegemónicos de educación y democracia, en una cultura política fuertemente marcada por el neoliberalismo donde el acceso a derechos se concibe como responsabilidad del individuo más que del Estado. Consignas como “Por una educación gratuita y de calidad” ubican la responsabilidad por la educación en el Estado. El proyecto recoge la intencionalidad política del Programa Mínimo de 1971. Para el estudiantado: “La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano” (Federación Universitaria Nacional, 2011).

El marco de acción colectiva que sustentó la protesta cafetera articulaba un diagnóstico de la crisis que responsabilizaba al gobierno y a la FNC; los caficultores se concibieron como portadores de una cultura, “una gran familia”, “gente trabajadora y de bien”, y articularon en su discurso al “pueblo

³ Snow y Benford (1992, p. 246) plantean que un marco maestro es aquel que se usa para movilizar un “sector” de movimientos, como el marco de “derechos” o el de “autonomía”. Ello implica cierta “modularidad” en el marco, es decir, su capacidad para ser usado por distintos actores en diversos contextos (Tarrow, 1997, p. 69).

colombiano”, particularmente quienes dependen de la cadena productiva del café. En fin, si bien los cafeteros formularon demandas concretas para solucionar la crisis, su discurso plantea la necesidad de reorientar el modelo de desarrollo basado en la mega minería y generar políticas para el desarrollo agrario.

El diagnóstico que el Movimiento hizo de la crisis, si bien admitió la incidencia de factores coyunturales como la revaluación o la caída de los precios internacionales del grano, situó las causas en las políticas de libre comercio implementadas desde hace dos décadas en el país, y el reciente viraje hacia un modelo de acumulación basado en la extracción de minerales, que además de abandonar el campo y la industria ocasiona “enfermedad holandesa”, revaluación y no trae ningún beneficio al agro. En consecuencia, el principal responsable y antagonista era el gobierno nacional, por no formular políticas orientadas al agro, que permitieran enfrentar este tipo de situaciones, en parte producto de los TLC. En segunda instancia, buena parte del antagonismo se situaba en la FNC.

Luego del Encuentro regional cafetero de 3 Junio de 2012 se produjo un documento de diagnóstico donde se afirmaba que se habían tomado decisiones que para enfrentar

las políticas del gobierno nacional y las acciones de especulación que impone el capital financiero y las multinacionales de la comercialización en el mercado mundial del grano: [...] En conclusión, después de veinte años de aplicación de políticas neoliberales, la realidad indica que éstas condujeron al fracaso, no sólo a los caficultores sino, al resto de la agricultura nacional. Más grave será la situación con la implementación de los Tratados de Libre Comercio” (Moir, 2012a).

Los manifestantes se consideran a sí mismos portadores de una cultura ligada al café. Los lazos sociales que los unieron en la protesta se comprendieron mediante la metáfora de la “gran familia cafetera”, que podía potencialmente articular todo el pueblo colombiano y aludía al carácter familiar de la economía del café. Esa metáfora se complementó con la articulación del significante “dignidad”, tanto para formular sus demandas como para contrarrestar la criminalización, afirmándose como “gente trabajadora y de bien”, no como delincuentes o “fuerzas oscuras”, y exhortar al “pueblo colombiano”, sobre todo aquellas personas que dependen de la cadena productiva del café, a unirse.

Iniciado el paro, un caficultor de Guacas decía: “Somos agricultores por vocación y tradición; el café es una cultura, algo que se lleva en la sangre, que viene de nuestros abuelos” (Gutiérrez, 2013a). Con ello ponía de presente el estrecho vínculo entre la identidad de buena parte del campesinado con el café. El vocero antioqueño, Guillermo Gaviria, resumió un matiz relevante de la identidad del movimiento al asegurar que era “una gran familia cafetera”, sin filiación con ningún partido (La Tarde, 2012), una metáfora que alude al carácter predominantemente familiar de la producción cafetera colombiana. En el mismo

sentido, el 25 de febrero, en Apía, departamento de Risaralda, el paro se convocaba con una pancarta que decía. “Apianos: todos somos hijos del café. Paro nacional cafetero, 25 de febrero. Participemos” (Álvarez, 2013).

En la construcción del “nosotros” también fue importante la articulación del significante “dignidad”, tanto en el nombre del movimiento como en las consignas y eslóganes de las protestas, por su conexión con la “indignación” de otras poblaciones alrededor del mundo y por su significado particular para los cafeteros, pues resalta su independencia económica y su laboriosidad. Según Gutiérrez, en Caldas se escuchaba permanentemente la consigna: “Nosotros somos cafeteros, no limosneros” (Gutiérrez, 2013b).

Ese “nosotros” se construyó mediante una constante política de articulaciones con otros actores que, sin ser estrictamente caficultores, resultaban afectados por la crisis del sector. Así, el significante “cafeteros” por momentos podría articular a todos los colombianos como una familia. La política de articulaciones fue evidente, tanto en los eslóganes de la protesta, como en los documentos del Movimiento. Gilberto Salinas, un cafetero que protestaba el 28 de febrero en el Boquerón (Tolima) afirmó que el paro debía ser una lucha de “todo el pueblo colombiano”, pues “si no trabajan los campesinos, no tienen con que comer, debe ser una lucha de todos” (El Nuevo Día, 2013). Una consigna plasmada en pancartas en distintos lugares decía: “580.000 familias enfrentan la miseria, ellos producen el café que usted está tomando”. Así mismo, para la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), “el paro cafetero no es la lucha de quienes se sustentan de este producto. Es una lucha del pueblo colombiano” (Rebelión, 2013). En el Encuentro del 3 de junio de 2012, un eslogan que se repitió por parte de la multitud para justificar la agremiación de grandes, medianos y pequeños productores fue “la lucha es de todos” (Otra América, 2013).

El Movimiento se planteó unas demandas concretas, que comprendían cada uno de los problemas del sector cafetero, para solucionar la crisis y que se condensaron en el pliego de peticiones acordado en el Encuentro del 3 de junio de 2012. Sin embargo, de la forma como los manifestantes diagnosticaron el problema y asignaron responsabilidades, es posible inferir que en el deber ser que plantean como una solución definitiva a su crítica situación se encuentra un redireccionamiento del modelo de acumulación y, particularmente, una revisión del auge económico de la denominada “locomotora minera” y las consecuencias que produce.

En fin, las protestas durante el gobierno Santos también evidencian un cambio importante a nivel de los proyectos políticos y los horizontes discursivos. Mientras el gobierno y los adversarios de las protestas sólo pueden ver en ellas retozos de la insurgencia, al examinar los discursos de las personas que protestan, al menos en los casos del movimiento estudiantil y del movimiento cafetero, pueden encontrarse claras evidencias de proyectos políticos plurales que cuestionan la inequidad del modelo neoliberal sustentado en la extracción de

materias primas, la injusticia, la ausencia de soberanía popular, de respeto por la diferencia y de democracia real, necesarios para la construcción de la paz en este país.

Corolario

Este artículo examinó la protesta social en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. En este período, la protesta social se ha dirigido principalmente en contra del modelo económico neoliberal, las consecuencias de los tratados de libre comercio y la “locomotora minero-energética”, sobre el sector rural y derechos como la salud y la educación. Sin embargo, las protestas no se explican como una reacción, que suponga una causalidad simple entre las condiciones económicas y la acción colectiva. Por el contrario, la acción de protesta se explica por la convergencia de cuando menos tres variables: las oportunidades políticas que provee el contexto, los procesos organizativos y los marcos de acción colectiva.

Así pues, aunque cada una de las protestas está definida por particularidades regionales, comparten un contexto general caracterizado por las oportunidades políticas que abre el tránsito entre los estilos de gobierno de Uribe y de Santos. La retórica reformista y de cambio de este último alienta expectativas que al mismo tiempo empiezan a verse frustradas, como el objetivo de alcanzar el desarrollo acudiendo a un modelo de acumulación extractivista que arruina el campo, o el intento de negociar la paz al tiempo que se ahondan las reformas neoliberales en sectores como la educación y la salud. A ello cabe aunar el antagonismo entre las élites, uribistas y santistas, que anteriormente sustentaron la hegemonía política, porque genera un juego complejo de alianzas entre actores que también abre oportunidades para la protesta, y la creciente deslegitimación del sistema político, entre otros aspectos.

Sin embargo, no sólo las oportunidades del contexto aseguran la producción de la acción colectiva. El incremento de la protesta en los tres años estudiados no habría sido posible si a esas oportunidades no se adicionan los procesos organizativos, que han enrolado personas que en otra circunstancia no se hubiesen movilizado, y los ingeniosos marcos de acción colectiva con que los manifestantes explican la realidad y articulan sus demandas y sus apoyos.

Bibliografía

ÁLVAREZ, J. “Los cafeteros marcharán por todo el país para protestar por la caída en los precios de la carga. Gobierno busca salida negociada”. *El Espectador*, Bogotá, 24 de febrero de 2013. <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-406649-el-paro-no-una-partida-de-poquer> [17 agosto de 2013]

- ARANGO GAVIRIA, Oscar. "Del paro a la constituyente cafetera". *Seminario Virtual Caja de Herramientas*.
<http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0342/articulo04.html>.
- ARCHILA, Mauricio. (2002). "Balance de 25 años de luchas en Colombia. Conclusión" en ARCHILA, Mauricio et. al., *25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000*. Bogotá, Cinep, 2002. (pp. 241-253).
- BARRERA, Victor - Diego QUIROGA. "Los retos y desafíos de la restitución de tierras ¿más de lo mismo?". *Cien Días*. CINEP/PPP, n. 75, 2012. (pp. 17-19).
- BAUTISTA, Sandra Carolina. "Notas para el debate al interior del campo popular". *Revista Izquierda*, Bogotá n. 24, 2012. (pp. 78-88).
- CARACOL. "Fiscalía mantendrá investigaciones por desórdenes durante paro cafetero". <http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/fiscalia-mantendra-investigaciones-por-desordenes-durante-paro-cafetero/20130308/nota/1855809.aspx> [8 de marzo de 2013].
- CRUZ, Edwin Rodríguez. "La Mane y el paro nacional universitario de 2011 en Colombia". *Ciencia Política*. Universidad Nacional de Colombia, n. 14, 2012. (pp. 140-193).
- DELGADO, Álvaro - Martha Cecilia, GARCÍA - Ana María, RESTREPO. "Sin estridencias, pero ¿qué tan democrática es ésta prosperidad". *Cien Días*. CINEP/PPP, n. 73, 2012. (pp. 48-51).
- DELLA PORTA, Donatella. "Movimientos sociales y Estado: algunas ideas en torno a la represión policial de la protesta". en MCADAM, Dough - John, MCCARTHY - Mayer N., ZALD, *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid, Itsmo, 1999. (pp. 100-142).
- EL COLOMBIANO. "Productores de papa y Gobierno logran acuerdo para levantar paro". http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/productores_de_papa_y_gobierno_logran_acuerdo_para_levantar_paro/productores_de_papa_y_gobierno_logran_acuerdo_para_levantar_paro.asp [9 de mayo de 2013a]
- EL COLOMBIANO. "Denuncian agresiones de la Policía a manifestantes cafeteros". http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/paro_cafetero_campeinos_denuncian_agresiones_de_las_autoridades/paro_cafetero_campeinos_denuncian_agresiones_de_las_autoridades.asp [6 de marzo de 2013b].
- EL ESPECTADOR. "Paro Agrario". <http://www.elespectador.com/paro-agrario> [30 de agosto de 2012].
- EL ESPECTADOR. "Gobierno estableció subsidio de \$145.000". <http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-409045-acuerdo-cafeteros> [7 de marzo de 2013a].
- EL ESPECTADOR. "Por vías de hecho no se logrará zona de reserva campesina en Catatumbo: Santos". <http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-433189-vias-de>

- hecho-no-se-lograra-zona-de-reserva-campesina-catatumbo [10 de julio de 2013b].
- EL ESPECTADOR. "Álvaro Uribe y Jorge Robledo, 'unidos' en respaldo al paro cafetero". <http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-406725-alvaro-uribe-y-jorge-robledo-unidos-respaldo-al-paro-cafetero> [25 de febrero de 2013c].
- EL ESPECTADOR. "Campesinos con deudas menores a \$20 millones tendrán 10 años para ponerse al día". <http://www.elespectador.com/noticias/economia/campesinos-deudas-menores-20-millones-tendran-10-anos-p-articulo-490646> [6 de mayo de 2014^a].
- EL ESPECTADOR. "Primero hay que dialogar para luego ir a paro". <http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-tal-paro-agrario-puede-esperar-articulo-489427> [28 de abril de 2014b].
- EL HERALDO. "4.000 campesinos del Catatumbo abandonan vías tras 53 días de protestas". <http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/4000-campesinos-del-catatumbo-abandonan-vias-tras-53-dias-de-protestas-119643> [15 de agosto de 2013].
- EL NUEVO DÍA. "Más heridos sigue dejando el paro cafetero en el Tolima". <http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/173574-mas-heridos-sigue-dejando-el-paro-cafetero-en-el-tolima> [28 de febrero de 2013].
- EL PAÍS. "Santos pide perdón por supuestos abusos del Esmad en Paro Nacional y exige investigaciones". <http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/pr-esuntos-abusos-esmad-fueron-denunciados-ante-organismos-internacionales> [26 de agosto de 2013].
- EL TIEMPO. "Radiografía de la protesta social en Colombia". <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10480172> [2 de octubre de 2011a].
- EL TIEMPO. "No aprobar la reforma a la educación sería la peor noticia': Santos". <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10513104> [7 de octubre de 2011b].
- EL TIEMPO. "En Pereira se decidirá la suerte del paro cafetero". http://www.eltiempo.com/economia/paro-cafetero-en-pereira-se-definesi-termina-o-no_12644086-4 [5 de marzo 2013a].
- EL TIEMPO. "'Quiéren incendiar el país y no lo vamos a permitir': Carrillo". http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12915465.html [8 de julio de 2013b].
- EL TIEMPO. "Lo que se juega en el Catatumbo". http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12901160.html [29 de junio de 2013c].

- EL TIEMPO. "El paro no ha sido de la magnitud que se esperaba: Santos". http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13002818.html [18 de agosto de 2013d].
- EL TIEMPO. "Hubo protestas en 10 departamentos. Enfrentamientos con Policía antimotines dejaron 59 heridos". http://www.eltiempo.com/politica/paro-cafetero-gobierno-solo-dialogar-con-la-federacin-de-cafeteros_12618291-4 [25 de febrero de 2013e].
- EL TIEMPO. "Gobierno teme que grupos ilegales y grandes productores del grano estén manipulando a cafeteros". http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12636942.html [4 de marzo de 2013f].
- ESCOBAR, Arturo - Sonia, ÁLVAREZ - Evelina, DAGNINO. "Introducción. Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos". en A. ESCOBAR, Arturo - Sonia, ÁLVAREZ - Evelina, DAGNINO (Eds.). *Política cultural y cultura política. Una mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá, Taurus-ICANH, 2001.
- FEDERACIÓN UNIVERSITARIA NACIONAL. "Conclusiones de las mesas de trabajo de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes". http://funcomisionesmodep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85:conclusiones-de-las-mesas-de-trabajo-de-la-mesa-amplia-nacional-de-estudiantes-&catid=34:nacionales&Itemid=37 [7 de Noviembre de 2011].
- FUNDACIÓN SOMOS DEFENSORES. <http://www.somosdefensores.org/index.php/extensions/ultimas-noticias/417-informe-semestral-2013-siaddhh-heroes-anonimos> [14 de agosto de 2013].
- GAMSON, William - David, MEYER. "Marcos interpretativos de la oportunidad política". en MCADAM, Doug - John D., MCCARTHY - Mayer, ZALD. *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid, Itsmo, 1999. (pp. 398-412).
- GONZÁLEZ, J. "¡La enfermedad holandesa ya es evidente!". *Cien Días*, CINEP/PPP, n. 78, 2013. pp. 73-75.
- GUTIÉRREZ, Laura Escobar. "Crónica y desenlace del Paro Cafetero en Irra, Caldas (segunda parte)". <http://www.lasillavacia.com/historia-invitado/41871/laurittag/cronica-y-desenlace-del-paro-cafetero-en-irra-caldas-segunda-parte> [11 de marzo de 2013a].
- GUTIÉRREZ, Laura Escobar. "El porqué del paro cívico cafetero nacional". <http://www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/5377-el-porque-del-paro-civico-cafetero-nacional-laura-gutierrez-escobar-> [26 de febrero de 2013b].

- HERNÁNDEZ, Diego. "Paz y Minería".
http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/item/paz-y-mineria?category_id=55 [15 de Febrero de 2013]
- KAVILANDO. "Anuncian paro de productores de papa para este 7 de mayo de 2013". http://www.kavilando.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1663:anuncian-paro-de-productores-de-papa-para-este-7-de-mayo-de-2013&catid=65:linea-territorio-y-despojo [15 de mayo de 2013].
- LA SILLA VACÍA. "Una estrategia, una amenaza y un golpe de suerte: así le bajó el Gobierno el perfil al paro". <http://www.lasillavacia.com/historia/asi-fue-la-estrategia-del-gobierno-para-bajarle-el-perfil-al-paro-agrario-45450> [21 de agosto de 2013].
- LA TARDE. "No queremos subsidios": Movimiento cafetero. <http://www.latarde.com/noticias/economica/104793-no-queremos-subsidios-movimiento-cafetero> [28 de Noviembre de 2012].
- LE BON, Gustave. *Psicología de las multitudes*. Buenos Aires, Albatros, 1952.
- LEÓN, Juanita. "Los camioneros le midieron el aceite a Juan Manuel Santos". <http://www.lasillavacia.com/historia/los-camioneros-le-midieron-el-aceite-juan-manuel-santos-21780> [18 de Febrero de 2011]
- MANTILLA, Alejandro. "El paro nacional agrario: cuando lo reivindicativo es transformativo".
http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-paro-nacional-agrario-cuando-lo-reivindicativo-es-transformativo?category_id=138 [20 de Agosto de 2013]
- MCADAM, Dough - John, MCCARTHY - Mayer N., ZALD. "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales". en MCADAM, Dough - John, MCCARTHY - Mayer N., ZALD (Eds.). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid, Itsmo, 1999. (pp. 21-46)
- MCADAM, Dough. "Orígenes terminológicos, problemas actuales, futuras líneas de investigación". En MCADAM, Dough - John, MCCARTHY - Mayer N., ZALD (Eds.). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid, Itsmo, 1999. (pp. 49-70).
- MCADAM, Dough - Sidney, TARROW - Charles, TILLY. *Dinámica de la contienda política*. Barcelona, Hacer. 2005.
- MCCARTHY, John D.. "Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades". En MCADAM, Dough - John. MCCARTHY - Mayer, N. ZALD (Eds.). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid, Itsmo, 1999. (pp. 205-220).

- MELUCCI, Alberto. *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México, El Colegio de México. 1999.
- MOIR. "En defensa de la dignidad, el ingreso y la producción cafetera nacional ¡Movilicémonos! Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros Colombianos, Riosucio, Caldas, junio 3 de 2012". <http://www.moir.org.co/En-defensa-de-la-dignidad-el.html> [26 de febrero de 2013]
- MOIR. "Jornada Nacional de Protesta por la Dignidad Cafetera: Martes 9 de octubre Oscar Gutiérrez Reyes, Coordinador Nacional Movimiento Defensa y Dignidad Cafetera, Manizales, octubre 4 de 2012". <http://www.moir.org.co/Jornada-Nacional-de-Protesta-por.html> [26 de febrero de 2013].
- MOIR. "Continúa la rebeldía cafetera: Apoyemos el Paro Cívico Cafetero Nacional Movimiento por la defensa y la dignidad de los cafeteros colombianos". <http://www.moir.org.co/Continua-la-rebeldia-cafetera.html> [31 enero de 2013a].
- MOIR. "Carta abierta a Juan Manuel Santos: Pliego de peticiones de los Cafeteros Colombianos Manizales, agosto 13 de 2012". <http://www.moir.org.co/Carta-abierta-a-Juan-Manuel-Santos.html> [26 de febrero de 2013b].
- MOVIMIENTO POR LA DEFENSA Y LA DIGNIDAD DE LOS CAFETEROS COLOMBIANOS. "En defensa de la dignidad, el ingreso y la producción cafetera nacional ¡Movilicémonos! Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros Colombianos, Riosucio, Caldas, 3 de junio de 2012". <http://www.moir.org.co/En-defensa-de-la-dignidad-el.html> [26 de febrero de 2012].
- OBERSCHALL, Anthony. "Oportunidades y creación de marcos en las revueltas de 1989 en el Este de Europa". en MCADAM, Dough - John. MCCARTHY - Mayer, N. ZALD (Eds.). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid, Itsmo, 1999. (pp. 143-181).
- OLSON, Mancur. "La lógica de la acción colectiva". en BATLLE, Albert (ed.). *Diez textos básicos de ciencia política*. Barcelona, Ariel, 1992. (pp.203-220).
- OTRA AMÉRICA. "Comienza la resistencia cafetera". <http://otramerica.com/causas/comienza-la-resistencia-cafetera/2023> [26 de febrero de 2013].
- PORTAFOLIO. "2 de febrero paro de camioneros por la eliminación de la tabla de fletes". <http://www.portafolio.co/archivo/documento/DR-8319> [15 de agosto de 2013].
- PRENSA UNIVERSIDAD. "Convocatoria Encuentro Nacional Estudiantil. Bogotá, 19 y 20 de marzo de 2011". <http://prensauniversidad.tk/> [19 marzo de 2011a].

- PRENSA UNIVERSIDAD. "Declaración Política del Encuentro Nacional Estudiantil del 19 y 20 de marzo de 2011 en Bogotá". [http://prensauniversidad.tk/\[7 de noviembre de 2011b\].](http://prensauniversidad.tk/[7 de noviembre de 2011b].)
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. "¡Le llegó la hora a Colombia! Discurso del presidente Juan Manuel Santos Calderón". *Presidencia.gov.co*, http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx [7 de agosto de 2013.]
- REBELIÓN. "Café: prestigio y riqueza para el país, pobreza para los cafeteros". <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=164637> [2 de marzo de 2013].
- REBELIÓN. "Pliego de Exigencias de la Cumbre Agraria" <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182221> [17 de marzo de 2014a].
- REBELIÓN. "Primera victoria de la unidad agraria campesina, étnica, afrocolombiana y popular" <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184504&titular=primera-victoria-de-la-unidad-agraria-campesina-%E9tnica-afrocolombiana-y-popular-> [9 de mayo de 2014b].
- RESTREPO, Ana Maria. "Luchas campesinas en tiempos de leyes de desarrollo rural". *Cien Días*, CINEP/PPP, n.75, 2012.(pp. 29-31).
- RESTREPO, Ana Maria. "Protestas en el Catatumbo: ¿y la historia?". *Cien Días*, CINEP/PPP, n.79, 2013. (pp. 17-20).
- RESTREPO, Ana Maria - Martha Cacilia, GARCÍA. "Paz ¿Y agenda social?". *Cien Días*, CINEP/PPP, n.77, 2013.(pp. 58-62).
- RIVAS, Antonio. "El análisis de los marcos: una metodología para el estudio de los movimientos sociales". en IBARRA, Pedro - Benjamín, TEJERINA (Eds.). *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*. Madrid, Trotta, 1998. (pp. 181-215).
- SALCEDO, Camilo. "Cronología de un conflicto: el caso de los trabajadores petroleros de Puerto Gaitán (Meta)". http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/item/cronologia-de-un-conflicto-el-caso-de-los-trabajadores-petroleros-de-puerto-gaitan-meta?category_id=71 [14 de febrero de 2013]
- SALCEDO, Leonardo - Ricardo, PINZÓN - Carlos, DUARTE. *El paro nacional agrario: un análisis de los actores agrarios y los procesos organizativos del campesinado colombiano*. Centro de Estudios Interculturales-Universidad Javeriana Cali, Inédito, 2013.
- SEMANA. "Mineducación invitó a los estudiantes a una mesa de diálogo". <http://www.semana.com/nacion/mineducacion-invito-estudiantes-mesa-dialogo/166018-3.aspx> [19 octubre de 2011].
- SEMANA. "Reina impunidad en asesinatos de líderes de tierras". <http://www.semana.com/nacion/articulo/reina-impunidad-asesinatos-lideres-tierras/256131-3> [9 de abril 2012].
- SEMANA. "Anatomía de los paros". <http://www.semana.com/nacion/articulo/anatomia-paros/354439-3> [14 de febrero de 2013]

- SEMANA. "Por qué hay paro este 19 de agosto". <http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-paro-este-19-agosto/354376-3> [18 de agosto de 2013].
- SEMANA. "El chicharrón de los baldíos", en <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-chicharron-baldios/346489-3> [15 de junio de 2013].
- SMELSER, Neil J.. *Teoría del comportamiento colectivo*. México, FCE, 1995.
- SNOW, David - Robert, BENFORD. "Master frames and cycles of protest". En A. MORRIS, Aldon D. - Carol, MCCLURY (Eds.). *Frontiers in social movement theory*. New Haven and London, Yale University Press, 1992. (pp. 133-155).
- TARROW, Sidney. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Alianza, 1997.
- TARROW, Sidney. "Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales". en MCADAM, Dough - John. MCCARTHY - Mayer, N. ZALD (Eds.). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid, Itsmo, 1999. (pp. 71-99).
- TORRES-TOVAR, Mauricio. "Más negocio, menos derecho a la salud". *Cien Días*, CINEP/PPP, n. 73, 2011. (pp. 44-47).
- TOURAINÉ, Alain. *El Regreso del actor*. Buenos Aires, Eudeba, 1987.
- UMAÑA, Dario Germán. "La asimetría en el TLC Colombia-USA". *Cien Días*, CINEP/PPP, n. 74, 2011. (pp. 48-51).
- VIGNOLO, Paolo - Oscar, MURILLO. "Un arma de doble filo: la espada de Bolívar y el resurgir de los nacionalismos en Colombia y Venezuela". en TOVAR, Zambrano Bernardo (Ed.). *Independencia: Historia Diversa*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012. (pp. 593-620)
- WILLS OTERO, Laura - Christian Iván, BENITO. "De Uribe a Santos: cambios y continuidades de la política colombiana en 2011". *Revista de Ciencia Política*, Pontificia Universidad católica de Chile, vol.32, n.1, 2012. (pp. 87-107).
- ZALD, N. Mayer. "Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos". en MCADAM, Dough - John. MCCARTHY - Mayer, N. ZALD (Eds.). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid, Itsmo, 1999. (pp. 369-388).

Edwin Cruz es politólogo y candidato a doctor en Estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia.

Contacto: ecruzr@unal.edu.co

Recibido: 27/08/2014

Aceptado: 04/12/2014